

El régimen chileno presiona, pero la Justicia marca los tiempos



Juez Piotti, en el ojo de una tormenta.

El juzgamiento será por posibles delitos en la Argentina y no en Chile.

El juez Piotti ordenó la libertad de un militante del PC argentino mientras las interpretaciones del episodio arrecian.

El proceso contra los cinco chilenos y tres argentinos vinculados con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez sufrió ayer una fuerte presión externa con las declaraciones del fiscal militar trasandino, coronel Fernando Torres: "La Argentina es en este momento —aseguró— y desde hace dos años, el lugar por donde pasan, transitan, se reúnen y entrenan extremistas del FPMR". Al margen de estas apreciaciones, el juez federal Alberto Piotti dispuso la libertad de Gabriel Weinstein, argentino y militante del Partido Comunista, "ya que sus explicaciones me parecieron satisfactorias", declaró el magistrado a *Página/12*.

De esta manera, quedó en siete el número de detenidos en la causa, mientras que pesa un pedido de detención sobre otras cuatro personas, dos de ellas militantes del PC argentino. En cuanto a éstos, se espera que se presenten ante la Justicia en las próximas horas. Weinstein fue puesto en libertad por falta de mérito y esta fue la última declaración indagatoria que tomé en la causa, ah-

ra me dedicaré a tomar otras pruebas y luego a sentarme y analizar bien la resolución que toma sobre la situación procesal de los involucrados", dijo Piotti a este diario.

La denuncia, hecha en Santiago por el coronel Torres —fiscal que instruye varios procesos contra miembros del FPMR— constituye la primera presión directa que intenta ejercer el régimen chileno sobre la Justicia argentina. No obstante, el calificado vocero gubernamental habló a *Página/12* que se tratará de evitar que con este caso la dictadura chilena fortalezca sus argumentos contra los sectores democráticos trasandinos "con quienes la Argentina y especialmente el radicalismo mantienen buenas relaciones". El funcionario aseguró que se los juzgará únicamente por delitos cometidos en territorio argentino y también descartó que el tema central pase por la extradición o no de los chilenos detenidos. "Lo importante —añadió— es que se sepa que la Argentina no está para que los guerrilleros de cualquier bando vengan a guarecerse, porque el Gobierno no lo va a permitir."

Por su parte, la dirigencia del PC local se apresta a publicitar un nuevo comunicado, ahora con el apoyo de distintas personalidades, políticos e instituciones reclamando, fundamentalmente, la no extradición de los detenidos, su libertad y el derecho de los argentinos a solidarizarse con la lucha del pueblo chileno contra la dictadura de Pinochet. En el PC se insiste en la intervención en el episodio de los servicios de inteligencia chilenos ya que, dijo un dirigente, la dictadura trasandina tiene interés —dada la proximidad del plebiscito— en fomentar el descrédito de los partidos chilenos, en este caso el PC.

El lunes, el juez Piotti interrogó a las dos mujeres chilenas, quienes negaron pertenecer al FPMR pero sí al PC. Cristina Donato Avendaño, una de las procesadas, reconoció haber organizado un laboratorio fotográfico para falsificar documentos y certificados de inmigración.

Distintos sectores políticos y gremiales, a su vez, se pronunciaron en favor de la lucha del pueblo chileno. La Federación de Estudiantes Terciarios (FETER) repudió ayer la detención de su secretario gremial, Julio Bulacio, exigiendo "su inmediata libertad". También el diputado nacional por el Partido Intransigente Miguel Monerreal, elevó un pedido de informes al Ejecutivo sobre la detención de los chilenos, al tiempo que rechazó "cualquier intento de extradición" y se mostró preocupado porque estas detenciones "sirvan a la campaña de los sectores autoritarios locales relacionados con la dictadura de Pinochet".